



**Superservicios**  
Superintendencia de Servicios  
Públicos Domiciliarios



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



GD-F-008 V.9

Página 1 de 7

**RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010022645 DEL 26/06/2014**

**POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN**

**EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,**

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012 y

**CONSIDERANDO:**

**I. ANTECEDENTES**

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *"se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que *"La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto y 10 para el caso de los prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el año calendario inmediatamente anterior."*

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con los decretos 1040 de 2012 y 1639 de 2013; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - C.P.A.C.A., para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de La Uvita, del departamento de Boyacá, es de categoría 6 y como prestador directo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2012, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013.

**II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN**

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010007235 del 18 de marzo de 2014, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al municipio de La Uvita, departamento de Boyacá, por no haber cumplido el siguiente criterio previsto en el artículo 5° del Decreto 1639 de 2013:



---

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

---

a. Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normalidad expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios relacionada con el cargue de información al sistema.

### **2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010007235 del 18 de marzo de 2014**

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010007235, del 18 de marzo de 2014, se envió citación al señor alcalde del municipio de La Uvita, del departamento de Boyacá, mediante el oficio No. SSPD 20144010147131, del 18 de marzo de 2014, remitido por correo certificado el 26 de marzo de 2014, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Transcurrido el término para que el representante legal del ente territorial compareciera a notificarse personalmente del contenido de la Resolución SSPD No. 20144010007235, del 18 de marzo de 2014, sin que ello ocurriera, se procedió a enviar el respectivo aviso de notificación mediante el oficio No. SSPD 20144010185331. De acuerdo a la información remitida por la empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. este documento fue entregado el 5 de abril de 2014 en la Alcaldía Municipal, por lo tanto y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, la notificación se considera surtida al día siguiente de su entrega en el lugar de destino.

Ahora bien, el señor Héctor Mauricio Cuevas Berrío, en su calidad de alcalde del municipio de La Uvita, del departamento de Boyacá, mediante documentos radicados en esta entidad bajo los números SSPD 20145290176882, del 10 de abril de 2014 y 20145290195272 del 22 de abril de 2014, presentó recurso de reposición y alcance al mismo, respectivamente, contra la Resolución No. SSPD 20144010007235, del 18 de marzo de 2014.

## **III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN**

### **3.1 Verificación de los requisitos de forma**

El artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos, los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por el alcalde del municipio de La Uvita, del departamento de Boyacá, quien de conformidad con el artículo 314 de la C.P. es considerado el representante legal y por lo tanto era el funcionario competente para interponerlo, además se confirma que fue presentado dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos, de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, los escritos radicados con los Nos. SSPD 20145290176882 y 20145290195272, reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A, por lo tanto se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

### **3.2 Argumentos del recurrente**

Como argumentos del recurso de reposición con radicado N° SSPD 20145290176882, del 10 de abril de 2014, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

*"TERCERO: Si bien la Entidad de Vigilancia de la Prestación de los servicios públicos domiciliarios, en los considerandos de la Resolución No. 20141010007235 del 18 de marzo de 2014, emitida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la cual decide sobre la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico SGP – APSB, correspondiente a la vigencia 2012 del municipio de La Uvita, departamento de Boyacá, señala que el motivo por el cual se DESCERTIFICA al municipio de La Uvita para la administración de los recursos del SGP- APSB, fue (...) 2. " En cuanto a la implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA, el municipio cargó*

---

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

---

el Decreto 15 del 16 de marzo de 2012, mediante la cual se adoptan las tarifas para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado; sin embargo no se reporta la adopción de tarifas para el servicio de aseo. Es preciso señalar que en el mencionado Decreto, el municipio de La Uvita, también fija las tarifas para el servicio de aseo, de acuerdo a la metodología tarifaria establecida mediante las resoluciones 351 y 352 del 2005 expedidas por la CRA.

*CUARTO: Si bien es cierto que no se reportó en su debido momento el Decreto 15 del 16 de Marzo de 2012 que fija las tarifas para el servicio de aseo, hay que tener en cuenta que es el mismo decreto que establece las tarifas para los servicios de acueducto y alcantarillado, no fue por que el municipio haya incumplido con este criterio establecido en el Decreto 1639 de 2013 sino por un error metodológico de la persona que está encargada de reportar la información al SUI, quien según manifiesta se guió por el diagnóstico con corte a 31 de mayo de 2013, de la misma Superintendencia, que en las observaciones del aspecto # 6 establece "No ha reportado todos los formatos mes a mes de Tarifas Aplicadas para el 2012 de los servicios que prestó directamente a 31 de diciembre de 2012"; circunstancia que lo pudo inducir al error"*

Por lo anterior, el señor alcalde municipal de La Uvita, Boyacá, solicita se revoque la Resolución 20144010007235, del 18 de marzo de 2014 y en su lugar se certifique al municipio de La Uvita, en relación con la administración de los recursos SGP – APSB correspondiente a la vigencia 2012.

Posteriormente, el municipio allegó alcance al recurso de reposición mediante radicado N° SSPD 20145290195272, del 22 de abril de 2014, en el cual manifiesta que:

*"PRIMERO: No se tenga en cuenta los numerales SEGUNDO, TERCERO y CUARTO de los hechos debido a que si bien la intención del municipio de La Uvita, departamento de Boyacá, en su condición de prestador directo de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, para la vigencia 2012, fue que mediante el Decreto 015 del 16 de marzo de 2012, el Alcalde Municipal, como autoridad tarifaria local adoptara las tarifas para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo; por un error de redacción en el mencionado Decreto, únicamente se adoptaron las Tarifas para ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.*

*SEGUNDO: (...) Es preciso señalar que el municipio de La Uvita, tan pronto se dio cuenta que en el Decreto 015 de 2012, no se adoptaron las tarifas para el servicio de aseo, expidió el Decreto No. 013 del 27 de marzo de 2014 por el cual se fijan tarifas para el servicio de aseo, de acuerdo a la metodología tarifaria establecida mediante las resoluciones 351 y 352 del 2005 expedidas por la CRA.*

*TERCERO: Si bien es cierto que mediante el Decreto 16 del 16 de Marzo de 2012, no se fijaron las tarifas para el servicio de aseo, no fue por que el municipio haya incumplido con este criterio establecido en el Decreto ya que el estudio Tarifario se realizó para los tres servicios que presta el municipio."*

### **3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.**

Con los documentos radicados Nos. SSPD 20145290176882, del 10 de abril de 2014 y 20145290195272, del 22 de abril de 2014, por medio del cual se sustentó y se dió alcance al recurso de reposición, se allegaron las siguientes pruebas:

3.3.1. Decreto No. 15 del 16 de marzo de 2012, mediante el cual se adoptan las tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo para el municipio de La Uvita.

3.3.2. Matriz anexa del estudio de costos y tarifas del servicio de aseo conforme a las resoluciones CRA 351 y 352 de 2005.

3.3.3. Diagnóstico emitido por la Superintendencia del Servicios Públicos Domiciliarios de la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP – APSB de la vigencia 2012 - Decreto 1629 de 2012, correspondiente al municipio de La Uvita, de fecha 31 de mayo de 2013.

3.3.4. Decreto No. 13 del 27 de marzo de 2014, mediante el cual se adopta la estructura de costos y tarifas del servicio público domiciliario de aseo para el municipio de La Uvita – Boyacá.

## Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

Los anteriores documentos, en su valor integral, se anexan al expediente.


#### IV. ANÁLISIS DE FONDO

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

##### 4.1. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con la implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA.

El recurrente afirma que el Decreto No. 15 del 16 de marzo de 2012, no sólo establece las tarifas para los servicios de acueducto y alcantarillado, sino también para el servicio de aseo, y como prueba de ello allega el mencionado Acto Administrativo; de otra parte, manifiesta que el acto de aprobación de tarifas no se reportó en su debido momento, debido a un error metodológico que atribuye al personal del municipio encargado de reportar la información en el SUI, por cuanto en el diagnóstico emitido por esta superintendencia con corte a 31 de mayo de 2013, se señaló que el municipio *"No ha reportado todos los formatos mes a mes de Tarifas Aplicadas para el 2012 de los servicios que prestó directamente a 31 de diciembre de 2012"*, aduciendo que dicha observación pudo inducir al error.

Al respecto, una vez revisado el SUI, se encontró que el 31 de agosto de 2012, el municipio de La Uvita cargó en el SUI, el Decreto No. 15, de marzo 16 de 2012, mediante el cual se establecen las tarifas únicamente para acueducto y alcantarillado, sin embargo en el Acto Administrativo reportado, no se regulan las tarifas del servicio de aseo, ni cargó otro acto anterior o posterior que las estableciera, motivo por el cual se tuvo como incumplido el criterio referente a la implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA, lo que condujo a descertificar al municipio de La Uvita. A continuación se adjunta imagen del Decreto que reportó el municipio en el SUI, por medio del cual se adoptan las tarifas sólo para los servicios de acueducto y alcantarillado.

	ALCALDÍA MUNICIPAL LA UVITA MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO ELABORACION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES VERSION 01   M-GT-P12   Página 2 de 2
<b>Decreto No. 015 de Marzo 16 de 2012</b>	
Por medio del cual se adoptan las tarifas de acueducto y alcantarillado del municipio de La Uvita, Boyacá	
<b>EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACA,</b>	
En uso de sus facultades legales, constitucionales y	
CONSIDERANDO:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Que la Ley 142 de 1994, establece que las tarifas deben reflejar los costos y gastos reales del servicio.</li><li>2. Que mediante la Resolución CRA 287 del 25 de mayo de 2004, publicada en el Diario Oficial el 8 de junio establece los criterios y se adopta la metodología con arreglo a las cuales las Empresas de Servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado deben determinar las tarifas de prestación del servicio, definiendo los procedimientos a seguir para aplicar e informar variaciones tarifarias.</li><li>3. Que en el Capítulo VI de la Resolución en mención, se fijan los criterios y metodologías de costos y tarifas para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con menos de 2.500 suscriptores.</li><li>4. Que el municipio de La Uvita, a través de la Unidad de Servicios Públicos, realizó estudio tarifario para los servicios de Acueducto y Alcantarillado y le dio amplia difusión y divulgación a los usuarios.</li></ol>	

## Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

De otra parte, no es comprensible el argumento del recurrente, según el cual no se reportó en su debido momento el Decreto No. 15, del 16 de marzo de 2012, toda vez que el Acto Administrativo si fue cargado dentro del término concedido para el efecto, la falencia que se advirtió radica en que no se reportó el acto de aprobación de las tarifas de aseo. En cuanto al diagnóstico con corte a 31 de mayo de 2013 que menciona y aporta, es necesario realizar dos precisiones, la primera, en el sentido de que el mismo se emitió con fundamento en los requisitos establecidos en el Decreto 1629 de 2012, el cual fue derogado por el Decreto 1639 del 31 de julio de 2013, razón que deriva en que la observación realizada a la luz de la norma que rigió el proceso de certificación que se agotó respecto de la vigencia 2012, no aplica, por cuanto el requisito exigido cambió; la segunda precisión, obedece a que el diagnóstico no constituye "un análisis definitivo", así las cosas, es responsabilidad del municipio, reportar la información correcta, completa y acorde a lo solicitado por el Decreto que corresponda en su momento. Además, en virtud de la expedición del decreto en mención, el 15 de agosto de 2013, esta superintendencia publicó en la página web del SUI un diagnóstico, en el cual se señaló:

6. Implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA, para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo.	(i) Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la vigencia 2012, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la SSPD relacionada con el cargue de la información al sistema.	Reportó el formato "Acto de Aprobación de Tarifas pdf" del SUI para los servicios de acueducto y alcantarillado el 31 de agosto de 2012.  Falta reportar el formato "Acto de Aprobación de Tarifas pdf" del SUI para el servicios de aseo.
--	---	--

En consecuencia, se desvirtúa la afirmación señalada por el recurrente sobre el supuesto error en el que esta superintendencia indujo al funcionario del municipio encargado de reportar la información al SUI, a través del diagnóstico.

No obstante lo anterior, el municipio allega como prueba con el recurso de reposición, el Decreto No. 15 de marzo 16 de 2012, en el cual se observa que se establecen las tarifas para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, que presta el municipio directamente.

Acto seguido, el 22 de abril de 2014 el municipio radica alcance al recurso de reposición, en el cual solicita no se tengan en cuenta, los numerales segundo, tercero y cuarto del recurso, por cuanto acepta que el Decreto No.15, de marzo 16 de 2012, sólo adopta las tarifas para los servicios de acueducto y alcantarillado, y aduce además que mediante el Decreto No. 13 del 27 de marzo de 2014, regularon lo concerniente a las tarifas del servicio de aseo, situación que claramente no satisface el criterio en discusión, toda vez que el Decreto 1639 de 2013, es expreso al establecer que para acreditar el aspecto relacionado con la implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA, el municipio debe reportar al SUI el Acto de Aprobación de Tarifas, "(...)expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia." (Subraya fuera del texto), y como resulta evidente de la confrontación de la fecha límite de cargue (30 de agosto de 2013) y la fecha de expedición del Acto Administrativo (27 de marzo de 2014), se evidencia que éste fue expedido con posterioridad a la fecha límite de reporte y, por lo tanto no se puede tener como válido dentro del presente asunto.

#### 4.2. Argumentos relacionados con las razones de forma que motivaron la descertificación.

El recurrente señala que el motivo de la descertificación, tomada por esta entidad, obedece a razones de forma y no de fondo, por ello es pertinente aclararle al recurrente que el criterio que incumplió el municipio, se encuentra señalado en el Decreto 1639 de 2013; partiendo de que la anterior es una norma procesal y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1564 de 2012, según el cual, "Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley", el alcalde municipal debió expedir el acto de aprobación de tarifas del servicio de aseo y reportarlo en el SUI, antes del 30 de agosto de 2013.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado así: *"Pues bien, nótese cómo las leyes de stirpe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. Sus dictados entonces, son ajenos al querer de los individuos: particulares y funcionarios llamados a aplicarlas."*, además advierte que: *"(...) En efecto, ha de repetirse, que la condición de normas taxativas que caracteriza las leyes que rigen los procedimientos es de inexorable acatamiento, máxime cuando estas normas constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del sistema normativo."* y concluye señalando: *"En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal."*

Así las cosas, no es cierto que la descertificación del municipio de La Uvita, según lo afirma el recurrente, obedeció a causas de forma. Según lo señala el artículo 228 de la Constitución Política, el principio de la prevalencia del derecho sustancial constituye un imperativo dentro del ordenamiento jurídico, el cual no es excluyente de las normas procesales ni preferente de las normas sustanciales. Sobre este tema la Corte se pronunció<sup>2</sup> y aclaró lo siguiente:

*"(...) Si bien este principio constitucional adquiere una gran trascendencia y autoridad en todo el ordenamiento jurídico y especialmente en las actuaciones judiciales, ello no quiere decir que las normas adjetivas o de procedimiento carezcan de valor o significación. Hay una tendencia en este sentido, que pretende discutir la validez de las normas que establecen requisitos y formalidades, y que es preciso rechazar para poner las cosas en su punto, en estas materias constitucionales, y concluir entonces que, no obstante la aludida prevalencia, dichas normas cuentan también con firme fundamento constitucional y deben ser fielmente acatadas (...)"*

Dado que la norma es clara en señalarle al alcalde el deber de asumir unas cargas procesales, que, si no cumple con ellas, le es aplicable la consecuencia procesal que el ordenamiento jurídico prevé para tales casos, esto es, la prevista en el artículo 5º de la Ley 1176 de 2007, reglamentado por el Decreto 1040 de 2012, según la cual, si la entidad territorial que es sujeto del proceso de certificación, no hubiera reportado la información señalada en el Decreto 1639 de 2013, debe entenderse que pierde la administración de los recursos del SGP y la competencia para asegurar la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no acreditó el cumplimiento del requisito que se le demanda; por lo tanto el recurso formulado por el señor Héctor Mauricio Cuevas Berrio, como alcalde municipal de La Uvita, no prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

#### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR** la Resolución No. SSPD 20144010007235, del 18 de marzo de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de La Uvita, departamento de Boyacá, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

**ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR** el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de Boyacá, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

<sup>1</sup> Corte Constitucional. Sentencia T - 213 del 28 de febrero 2008. MP Doctor Jaime Araújo Rentería

<sup>2</sup> Corte Constitucional. Sentencia C -1512 del 8 de noviembre 2000. MP Álvaro Tafur Galvis

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

---

**ARTÍCULO CUARTO.-** La presente Resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria y contra la misma no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D. C.



**JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO**

Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Vanessa Benavides Quevedo - Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Revisó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Aprobó: Giovanni Bonilla Rodríguez - Coordinador Grupo de Certificaciones e Información

Visto Bueno: Samuel Alfonso Forero - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Expediente: 20094011548480255A